



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
21 de junio de 2017
Español
Original: inglés

Comité de los Derechos del Niño

Observación general núm. 21 (2017) sobre los niños en situación de calle

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 23 de febrero de 2018.

GE.17-10187 (S) 280218 280218



* 1 7 1 0 1 8 7 *

Se ruega reciclar



Índice

| | <i>Página</i> |
|---|---------------|
| I. Introducción: “cambiar nuestra historia” | 3 |
| II. Contexto general | 3 |
| III. Objetivos | 5 |
| IV. Estrategias holísticas y a largo plazo con un enfoque basado en los derechos del niño | 5 |
| V. Principales artículos de la Convención en relación con los niños en situación de calle | 10 |
| VI. Difusión y cooperación | 24 |

I. Introducción: “cambiar nuestra historia”

1. Los niños en situación de calle con los que se consultó para la presente observación general manifestaron enérgicamente su necesidad de ser respetados, y de tener dignidad y derechos. Al expresar sus sentimientos, dijeron, entre otras cosas: “Respétemnos como a seres humanos”; “Quisiera que la gente que nunca ha vivido en las calles nos viese como personas con orgullo, como personas normales”; “No se trata de sacarnos de las calles y meternos en centros de acogida. Se trata de que se nos reconozca un estatus”; “Los Gobiernos no deberían decir que no hemos de estar en la calle. No deberían acosarnos si estamos en la calle. Se nos debería aceptar”; “Que vivamos en la calle no significa que no podamos tener derechos”; “La calle te marca: o sales de ella o no”; “No queremos ayuda, caridad, compasión. Los Gobiernos deberían colaborar con la comunidad para otorgarnos derechos. No pedimos caridad. Quiero convertirme en alguien que se valga por sí mismo”; “Deberían darnos la oportunidad de utilizar nuestros talentos y cualidades para cumplir nuestros sueños”; “Dennos la oportunidad de cambiar nuestra historia”¹.

II. Contexto general

Propósito

2. En la presente observación general, el Comité de los Derechos del Niño proporciona a los Estados orientaciones bien fundamentadas sobre cómo desarrollar estrategias nacionales amplias y a largo plazo sobre los niños en situación de calle, haciendo uso de un enfoque holístico de los derechos del niño y con mecanismos tanto de prevención como de respuesta que se ajusten a la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien en la Convención no se hace referencia explícita a los niños en situación de calle, todas sus disposiciones son aplicables a estos niños, que experimentan la vulneración de una gran mayoría de los artículos de la Convención.

Consultas

3. En total, se consultó a 327 niños y jóvenes de 32 países en siete consultas regionales. Los representantes de la sociedad civil respondieron a un llamamiento general para la presentación de comunicaciones y se compartió un proyecto avanzado con todos los Estados partes.

Terminología

4. En el pasado, para describir a los niños en situación de calle se han utilizado términos como “niños de la calle”, “niños en la calle”, “niños callejeros”, “niños fugitivos”, “niños abandonados” (*throwaway children*), “niños que viven y/o trabajan en la calle”, “niños sin hogar” y “niños vinculados a la calle”. En la presente observación general, el término “niños en situación de calle” se utiliza para hacer referencia a: a) los niños que dependen de la calle para vivir y/o trabajar, ya sea por sí solos, con otros niños o con su familia; y b) un conjunto más amplio de niños que han conformado vínculos sólidos con los espacios públicos y para quienes la calle desempeña un papel fundamental en su vida cotidiana y su identidad. Esta población más amplia incluye a los niños que periódicamente, aunque no siempre, viven y/o trabajan en la calle y a los niños que no viven ni trabajan en la calle, pero sí acompañan habitualmente en la calle a sus compañeros,

¹ Todas las citas proceden de consultas o documentos escritos para la presente observación general. Proviene, respectivamente, de: niños en Bangladesh (comunicación escrita de Dhaka); niños en América Latina (consulta en México); 1 niño de 15 años del Brasil; 1 chico y 1 chica, ambos de 18 años, de la India; niños y jóvenes de la República Democrática del Congo; niños y jóvenes en Europa (consulta en Bruselas); 1 niño de 16 años del Pakistán; 1 niño de Burundi; y 1 joven de 18 años, del Brasil.

hermanos o familiares. En cuanto a los niños en situación de calle, se entiende que estar “en espacios públicos” incluye pasar una cantidad de tiempo considerable en las calles o en mercados callejeros, parques públicos, espacios comunitarios, plazas y estaciones de autobuses y de tren. No se incluyen los edificios públicos como escuelas, hospitales y otras instituciones comparables.

Observaciones fundamentales

5. Se utilizan diferentes enfoques con respecto a los niños en situación de calle, a veces de forma combinada. Entre ellos figuran un enfoque basado en los derechos del niño, según el cual se respeta al niño como titular de derechos y las decisiones a menudo se adoptan conjuntamente con él; un enfoque asistencial, consistente en “rescatar” de la calle al niño, al que se percibe como un objeto o una víctima, y en función del cual las decisiones se adoptan en nombre del niño sin tomar seriamente en consideración sus opiniones; y un enfoque represivo, según el cual se percibe al niño como un delincuente. Los enfoques asistencial y represivo no tienen en cuenta al niño como titular de derechos y tienen como resultado que los niños sean expulsados a la fuerza de la calle, lo que vulnera aún más sus derechos. Afirmar que los enfoques asistencial y represivo sirven al interés superior del niño no basta para convertirlos en enfoques basados en los derechos². Para aplicar la Convención, es indispensable utilizar un enfoque basado en los derechos del niño.

6. Los niños en situación de calle no son un grupo homogéneo. Sus características varían en cuanto a la edad, el sexo, el origen étnico, la identidad como indígena, la nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad y expresión de género, entre otros factores. Esa diversidad entraña que sus experiencias, riesgos y necesidades también sean diferentes. La índole y la duración de la estancia física en la calle también varían considerablemente de un niño a otro, al igual que la naturaleza y el alcance de las relaciones con los compañeros, los familiares, los miembros de la comunidad, los agentes de la sociedad civil y las autoridades públicas. Las relaciones de los niños pueden ayudarlos a sobrevivir en las calles o bien perpetuar condiciones en las que sus derechos sean vulnerados violentamente. Los niños participan en diversas actividades en los espacios públicos, entre trabajar, desarrollar una vida social, realizar actividades de ocio y esparcimiento, cobijarse, dormir, cocinar, asearse y abusar de sustancias adictivas o mantener relaciones sexuales. Pueden llevar a cabo esas actividades de manera voluntaria, por falta de opciones viables o debido a la coacción o el uso de la fuerza por otros niños o adultos. Los niños pueden realizar esas actividades solos o en compañía de familiares³, amigos, conocidos, miembros de pandillas o compañeros explotadores, niños de más edad y/o adultos.

7. A menudo, los datos no se recopilan o se desglosan de forma sistemática, por lo que no se conoce el número de niños en situación de calle. Las estimaciones fluctúan según las definiciones utilizadas, las cuales reflejan las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y de otra índole. La falta de datos hace que esos niños sean invisibles, lo que da lugar a que no se formulen políticas y a que las medidas adoptadas sean de carácter puntual, temporal o a corto plazo. Esto da lugar a la persistencia de violaciones múltiples de los derechos que echan a los niños a la calle y que perduran cuando estos están en ella. Esta cuestión afecta a todos los Estados.

8. Las causas, la prevalencia y las experiencias de los niños en situación de calle varían dentro de los Estados y de un Estado a otro. Las desigualdades basadas en la condición económica, la raza y el género son algunas de las causas estructurales de la aparición y exclusión de los niños en situación de calle. Estas se ven exacerbadas por la pobreza

² Véanse las observaciones generales núm. 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, párr. 59, y núm. 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

³ En el caso de los niños en situación de calle que están con sus familias, la presente observación general se centra en los niños como los principales titulares de derechos. En el caso de los niños en situación de calle que tengan hijos propios, el interés superior de cada generación de niños debe ser la consideración primordial.

material, la insuficiencia de la protección social, las inversiones mal enfocadas, la corrupción y las políticas fiscales (impositivas y de gastos) que reducen o eliminan la capacidad de los más pobres para salir de la pobreza. Los efectos de las causas estructurales se ven agravados aún más en caso de una desestabilización repentina, provocada por un conflicto, una hambruna, una epidemia, un desastre natural o un desalojo forzoso, u otros acontecimientos que desemboquen en el desplazamiento o la migración forzada. Otras causas son: la violencia, el maltrato, la explotación y el descuido en el hogar o en instituciones de atención o educativas (incluidas las religiosas); la muerte de los cuidadores; la renuncia al niño (entre otras razones, por causa del VIH/SIDA)⁴; el desempleo de los cuidadores; la precariedad de las familias; la descomposición de la familia; la poligamia⁵; la exclusión de la educación; el abuso de sustancias adictivas y los problemas de salud mental (de los niños o de sus familiares); la intolerancia y la discriminación contra, entre otros, los niños con discapacidad, los niños acusados de brujería, los ex niños soldados rechazados por las familias y los niños expulsados de sus familias por cuestionar su sexualidad o por haberse identificado como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales o asexuales; y la incapacidad de las familias para aceptar la resistencia de los niños a prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina⁶.

III. Objetivos

9. Los objetivos de la observación general son los siguientes:

a) Aclarar la obligación de los Estados de aplicar un enfoque basado en los derechos del niño a las estrategias e iniciativas en favor de los niños en situación de calle;

b) Suministrar a los Estados una orientación amplia y bien fundamentada sobre la utilización de un enfoque holístico basado en los derechos del niño para: evitar que los niños sean víctimas de vulneraciones de sus derechos y de una falta de opciones que los haga depender de la calle para su supervivencia y desarrollo; y promover y proteger los derechos de los niños que ya están en situación de calle, garantizando una atención sin interrupciones y ayudándolos a desarrollar su pleno potencial;

c) Determinar las consecuencias de ciertos artículos de la Convención para los niños en situación de calle con el fin de que sean respetados en mayor medida como titulares de derechos y ciudadanos de pleno derecho, y mejore la comprensión de las conexiones que los niños tienen con la calle.

IV. Estrategias holísticas y a largo plazo con un enfoque basado en los derechos del niño

A. El enfoque basado en los derechos del niño

Descripción

10. En un enfoque basado en los derechos del niño, el proceso por el que se hacen efectivos dichos derechos es tan importante como el resultado final. Un enfoque basado en los derechos del niño garantiza el respeto de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación del niño como titular de derechos.

⁴ Véase la observación general núm. 3 (2003) sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, párr. 7.

⁵ Véase la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño (2014), sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, párrs. 25 a 28.

⁶ *Ibid.*, párrs. 19 a 24.

11. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)⁷, un enfoque basado en los derechos del niño es aquel que:

a) Promueve que se hagan efectivos los derechos del niño establecidos en la Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos;

b) Emplea las normas y principios relativos a los derechos del niño procedentes de la Convención y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos para orientar el comportamiento, las acciones, las políticas y los programas, en particular: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a ser escuchado y tomado en serio; y el derecho del niño a ser guiado en el ejercicio de sus derechos por sus cuidadores, sus padres y los miembros de la comunidad, de modo acorde con la evolución de sus facultades;

c) Fomenta la capacidad de los niños como titulares de derechos para reclamar esos derechos y la capacidad de los garantes para cumplir las obligaciones que tienen con respecto a los niños.

Importancia para los niños en situación de calle

12. El Comité considera que las estrategias e iniciativas que adoptan un enfoque basado en los derechos del niño cumplen los criterios principales para una buena práctica, independientemente del nivel o del contexto. Los niños en situación de calle a menudo desconfían de la intervención de adultos en sus vidas. Al haber recibido un trato abusivo por parte de los adultos en la sociedad, son reticentes a abandonar su autonomía que tanto les ha costado ganar, aunque sea limitada. Este enfoque hace hincapié en el pleno respeto de la autonomía de los niños, entre otros medios prestándoles apoyo para que encuentren alternativas a la dependencia de la calle. Promueve su resiliencia y sus capacidades, reforzando su papel en la adopción de decisiones y empoderándolos como agentes socioeconómicos, políticos y culturales. Se apoya en sus puntos fuertes y en las contribuciones positivas que hacen para la supervivencia y desarrollo de ellos mismos y de sus compañeros, familiares y comunidades. La aplicación de este enfoque no solo es un imperativo moral y jurídico sino también la forma más sostenible de identificar y aplicar soluciones a largo plazo con los niños en situación de calle.

B. Estrategias nacionales

Presentación general

13. Para cumplir las obligaciones dimanantes de la Convención, se insta a los Estados a que adopten estrategias holísticas y a largo plazo y hagan las asignaciones presupuestarias necesarias para los niños en situación de calle. A continuación se indican las cuestiones y procesos intersectoriales, seguidos del contenido temático, que deben abordarse en esas estrategias. En su calidad de expertos en sus propias vidas, los niños en situación de calle deberían participar en la elaboración y aplicación de las estrategias. Un primer paso es que los Estados reúnan información sobre esos niños en su país para decidir la mejor forma de defender sus derechos. Los Estados deberían adoptar un enfoque intersectorial para comprender cómo la política en un sector, por ejemplo, el de las finanzas, afecta la política en otro, por ejemplo, el de la educación, lo que a su vez afecta a los niños en situación de calle. Los Estados deberían fomentar la cooperación intersectorial e interestatal.

Examen de políticas y legislación

14. Los Estados deberían evaluar cómo mejorar sus leyes y políticas de manera acorde con las recomendaciones de la presente observación general. Asimismo deberían, con

⁷ Véase UNICEF, *Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools* (Ginebra, 2014), pág. 21. Disponible en https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf. Véase también la observación general núm. 13, párr. 59. Véase también “The Human Rights Based Approach to Development Cooperation”, disponible en <http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies>.

efecto inmediato: eliminar las disposiciones que discriminen, directa o indirectamente a los niños, sus padres o sus familiares a causa de su situación de calle; abolir todas las disposiciones que permitan o respalden la realización de redadas o la retirada arbitraria de niños y de sus familias de la calle o de los espacios públicos; abolir, cuando proceda, las figuras penales que tipifican como delito y afectan de manera desproporcionada a los niños en situación de calle, como la mendicidad, el incumplimiento de los toques de queda, el merodeo, el vagabundeo y la fuga del hogar; y abolir los delitos que criminalizan a los niños por ser víctimas de la explotación sexual comercial, y los denominados delitos contra la moral, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los Estados deberían dotarse de leyes de la infancia o de protección del niño, mediante la revisión de su legislación o la aprobación de instrumentos nuevos, que se fundamenten en un enfoque basado en los derechos del niño y se ocupen específicamente de los niños en situación de calle. Estas leyes deberían aplicarse mediante políticas, mandatos, procedimientos operativos, directrices, y mecanismos de prestación de servicios, supervisión y aplicación que sean favorables, y deberán formularse en colaboración con los principales interesados, incluidos los niños en situación de calle. Es posible que los Estados necesiten diseñar políticas y definiciones jurídicas de esos niños que sean pertinentes para el contexto nacional, basándose en la investigación participativa, en contextos en que ello sea necesario para facilitar la actuación de profesionales y servicios con un mandato legal. Sin embargo, el proceso de elaboración de las definiciones jurídicas no debería retrasar las medidas destinadas a hacer frente a las violaciones de los derechos.

Función del Estado y responsabilidades, reglamentación y coordinación de los agentes no estatales

15. Las estrategias para los niños en situación de calle deberían tener en consideración el papel de los agentes estatales y no estatales. La función del Estado, como principal garante, se expone en la sección V *infra*. Los Estados tienen la obligación de ayudar a los padres o cuidadores a proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos y en consonancia con la evolución de las facultades del niño, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo óptimo (arts. 5, 18 y 27). Los Estados también deberían apoyar a la sociedad civil, como agentes complementarios, a la hora de proporcionar servicios personalizados y especializados para los niños en situación de calle desde un enfoque basado en los derechos del niño, mediante la financiación, la acreditación y la regulación. El sector empresarial debe cumplir sus responsabilidades en relación con los derechos del niño y los Estados deberían velar por que así sea⁸. Los agentes estatales y no estatales tienen que coordinarse. Los Estados tienen la obligación legal de velar por que los proveedores de servicios del sector privado actúen de conformidad con las disposiciones de la Convención⁹.

Cómo abordar los aspectos complejos

16. Es necesario que las estrategias hagan frente a una multitud de causas, que van desde las desigualdades estructurales hasta la violencia familiar. También deben contemplar medidas de ejecución inmediata, como las de poner fin a las redadas o dejar de retirar de forma arbitraria a los niños de los espacios públicos, y medidas que habrán de aplicarse de manera progresiva, como la protección social integral. Es probable que se necesite una combinación de cambios en la legislación, las políticas y la prestación de servicios. Los Estados deberían comprometerse a hacer efectivos los derechos humanos más allá de la infancia. En particular, deberían velar por que existan mecanismos de seguimiento para los niños en entornos de cuidado alternativo y para los niños en situación de calle en su transición a la edad adulta cuando cumplen 18 años, a fin de evitar el cese repentino del apoyo y los servicios.

⁸ Véase la observación general núm. 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño, párr. 8.

⁹ Véase las observaciones generales núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención, párrs. 42 a 44; núm. 7 (2005) sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia, párr. 32; núm. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, párr. 25; y núm. 16, párr. 25.

Sistemas de protección integral de la infancia

17. Dentro de un marco legislativo y de políticas, la presupuestación, el desarrollo y el fortalecimiento de sistemas holísticos para la protección de la infancia, articulados en torno a un enfoque basado en los derechos del niño, constituyen la base de las medidas prácticas necesarias para las estrategias de prevención y respuesta. Esos sistemas nacionales de protección de la infancia deberían abarcar a los niños en situación de calle e incorporar plenamente los servicios específicos que esos niños necesitan. Los sistemas deben proporcionar una atención ininterrumpida en todos los contextos pertinentes, como la prevención, la intervención temprana, la divulgación en la calle, las líneas de atención telefónica, los centros de acogida, los centros de día, la asistencia residencial temporal, la reunificación familiar, los hogares de guarda, la vida independiente u otras opciones de asistencia a corto o largo plazo. Sin embargo, no todos esos contextos son pertinentes para todos los niños en situación de calle. Por ejemplo, la prevención y la intervención temprana son prioritarias para los niños que se encuentren en una fase inicial en la que se encuentren estableciendo conexiones fuertes y dañinas con la calle, pero no son pertinentes para los niños nacidos en situación de calle. Es posible que algunos niños nunca vivan una situación de acogimiento residencial mientras que, para otros, la reunificación familiar no es pertinente ni apropiada. Las estrategias deberían dejar claro que en todos y cada uno de los contextos debe aplicarse un enfoque basado en los derechos del niño. Deberían reducirse las cargas y demoras administrativas en el acceso a sistemas de protección de la infancia. La información debería estar disponible en formatos accesibles y adaptados a la infancia y se debería apoyar a los niños en situación de calle para que comprendan los sistemas de protección de la infancia y conozcan su funcionamiento.

Fomento de la capacidad de las personas que están en contacto con el niño

18. Los Estados deberían invertir en que se imparta capacitación básica de buena calidad, tanto de manera inicial como durante la vida profesional, sobre los derechos del niño, la protección de la infancia y el contexto local de los niños en situación de calle a todos los profesionales que puedan entrar en contacto directo o indirecto con dichos niños, en esferas tales como la formulación de políticas, la aplicación de la ley, la justicia, la educación, la salud, el trabajo social y la psicología. Esa capacitación puede incorporar los conocimientos técnicos de los agentes no estatales y debería integrarse en los planes de estudio de las instituciones de formación pertinentes. En el caso de profesionales que trabajen con los niños en situación de calle como parte específica de su mandato, por ejemplo los trabajadores sociales que actúen en la calle o los miembros de unidades policiales especializadas en la protección de la infancia, se requerirá una formación adicional y en profundidad sobre un enfoque basado en los derechos del niño, el apoyo psicosocial y el empoderamiento de los niños. Los “recorridos de divulgación” y “recorridos callejeros” son un importante método de formación sobre el terreno. La capacitación básica y especializada debería incluir el cambio actitudinal y comportamental, así como la transferencia de conocimientos y el desarrollo de aptitudes, y debería fomentar la cooperación y la colaboración intersectoriales. Los Gobiernos nacionales y locales deberían comprender y apoyar el papel fundamental de los trabajadores sociales, incluidos los que prestan servicio en la calle, para la detección temprana y la prestación de apoyo a las familias con niños en situación de riesgo y a los niños en situación de calle. Se debería implicar a los profesionales en el desarrollo participativo de los procedimientos operativos, las directrices sobre buenas prácticas, las directrices estratégicas, los planes, las normas de desempeño y los códigos disciplinarios, y se les debería dar apoyo para que puedan aplicar estos instrumentos. Los Estados deberían facilitar la sensibilización y capacitación de otros interesados que entren en contacto directo o indirecto con los niños en situación de calle, como los trabajadores del transporte, los representantes de los medios de comunicación, los líderes comunitarios, espirituales y religiosos, y los agentes del sector privado, a los que habría que alentar a que adopten el documento Derechos del Niño y Principios Empresariales¹⁰.

¹⁰ Véase <http://childrenandbusiness.org>. Véase también la observación general núm. 16.

Prestación de servicios

19. Los Estados deberían adoptar medidas para asegurar que los niños en situación de calle puedan acceder a servicios básicos como la salud y la educación, y a la justicia, la cultura, el deporte y la información. Asimismo, deberían velar por que sus sistemas de protección de la infancia presten servicios especializados en la calle, en los que participen trabajadores sociales capacitados, con un conocimiento sólido de las conexiones callejeras de la zona, que puedan ayudar a los niños a restablecer el contacto con la familia, los servicios de la comunidad local y la sociedad en general. Esto no implica necesariamente que los niños deban renunciar a sus conexiones con la calle, sino que la intervención debería servir para que sus derechos queden a salvo. La prevención, la intervención temprana y los servicios de apoyo localizados en la calle son elementos que se refuerzan mutuamente y proporcionan una atención ininterrumpida dentro de una estrategia a largo plazo, holística y eficaz. Si bien los Estados son los que tienen la obligación primordial, las actividades de la sociedad civil pueden complementar la labor del sector público en la elaboración y la ejecución de una prestación de servicios innovadora y personalizada.

Aplicación en el plano del gobierno local

20. Para que las iniciativas tengan éxito, es necesario comprender al detalle los contextos locales y prestar apoyo individualizado a los niños. A la hora de ampliar las iniciativas, es imperativo velar por no perder a niños en el proceso. Los Estados deberían fomentar y apoyar las intervenciones especializadas de carácter local, realizadas mediante alianzas y centradas en un enfoque basado en los derechos del niño, que sean flexibles y de pequeño alcance, dotadas de un presupuesto suficiente y en muchos casos dirigidas por organizaciones de la sociedad civil conocedoras de las especificidades locales. Estas intervenciones deberían estar coordinadas por los gobiernos locales y recibir apoyo del Estado, a través del sistema nacional de protección de la infancia. Convendría que recibieran apoyo del sector privado, en forma de recursos para el fomento de la capacidad y técnicas de organización, y de las instituciones académicas, en cuanto a capacidad de investigación para permitir la adopción de decisiones con base empírica. Adaptar las ciudades y comunidades a los niños contribuye a crear una atmósfera de aceptación y constituye la base para el establecimiento de redes sociales y de sistemas de protección comunitaria destinados a los niños en situación de calle. Estos niños deberían recibir apoyo para participar en procesos de planificación locales, descentralizados y planteados en sentido ascendente.

Supervisión y rendición de cuentas

21. La aplicación efectiva de la legislación, las políticas y los servicios depende de mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas que sean transparentes y se apliquen de forma estricta. Los Estados deberían apoyar la participación de los niños en situación de calle en esferas tales como los mecanismos de responsabilidad social, como coaliciones de agentes estatales y no estatales, comités o grupos de trabajo que supervisen las políticas públicas y se centren en dichos niños. Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos encargadas de promover y supervisar la aplicación de la Convención¹¹, como los defensores de los derechos del niño, deben ser de fácil acceso para los niños en situación de calle.

Acceso a la justicia y los recursos jurídicos

22. Los niños en situación de calle que han sido víctimas o son supervivientes de violaciones de los derechos humanos tienen derecho a disponer de recursos jurídicos y de otro tipo que sean efectivos, incluida la representación legal. Esto incluye el acceso a mecanismos de denuncias individuales, en nombre propio o representados por adultos, y a mecanismos de reparación judiciales y no judiciales en los planos local y nacional, incluidas instituciones independientes de derechos humanos. Si se han agotado los recursos

¹¹ Véase la observación general núm. 2 (2002) sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño, párrs. 2 y 15.

internos, debería ser posible acceder a los mecanismos internacionales de derechos humanos competentes, incluido el procedimiento establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones. Entre las medidas de reparación pueden figurar la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición de las violaciones de derechos¹².

Reunión de datos e investigación

23. En asociación con los medios académicos, la sociedad civil y el sector privado, los Estados deberían elaborar mecanismos sistemáticos, participativos y respetuosos de los derechos para reunir datos y compartir información desglosada sobre los niños en situación de calle. Los Estados deben impedir que la recopilación y el empleo de tal información estigmatice o perjudique a esos niños. La recopilación de datos sobre los niños en situación de calle debería integrarse en la recopilación de datos a nivel nacional sobre la infancia, velando por que los datos nacionales no se basen únicamente en encuestas dirigidas a los hogares, sino que engloben también a los niños que viven fuera de un entorno doméstico. Los niños en situación de calle deberían participar en la fijación de los objetivos y programas de investigación, en la recopilación de información, el análisis y la difusión de la investigación para fundamentar la formulación de políticas, y en el diseño de intervenciones especializadas¹³. Las situaciones de calle cambian rápidamente y es necesario realizar una labor de investigación periódica para que las políticas y los programas estén actualizados.

V. Principales artículos de la Convención que guardan relación con los niños en situación de calle

Presentación general

24. Todos los derechos enunciados en la Convención y sus Protocolos Facultativos están interrelacionados y son indivisibles, para los niños en situación de calle como para todos los niños. La presente observación general debería leerse conjuntamente con todas las demás observaciones generales del Comité. Se centra en los artículos que revisten particular importancia para los niños en situación de calle y que anteriormente no han sido objeto de observaciones generales del Comité. Por ejemplo, aunque está clara la importancia de las disposiciones relativas a la violencia, la educación, la justicia juvenil y la salud, aquí aparecen como referencias relativamente breves a las observaciones generales existentes. Por el contrario, otros artículos son objeto de un examen más extenso, habida cuenta de sus consecuencias para los niños en situación de calle y del hecho de que no habían sido examinados en detalle anteriormente por el Comité. Los artículos seleccionados a continuación no implican que los derechos civiles y políticos primen sobre los derechos sociales, económicos y culturales en el caso de los niños en situación de calle.

A. Artículos de importancia general en un enfoque basado en los derechos del niño

Artículo 2 sobre la no discriminación

No discriminación por motivos de origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición

25. Los Estados deben respetar los derechos enunciados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna. Sin embargo, la discriminación es una de las principales causas de que los niños acaben en una situación de calle. A continuación, los niños son objeto de discriminación debido a sus conexiones con

¹² Véase <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>.

¹³ Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), "A Human Rights-Based Approach To Data", disponible en www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf.

la calle, es decir, por motivos de origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo que da lugar a consecuencias negativas para toda la vida. El Comité interpreta que la frase “cualquier otra condición” del artículo 2 de la Convención también abarca la situación de calle de los niños o la de sus progenitores y otros familiares.

*Discriminación sistémica*¹⁴

26. La discriminación puede ser directa o indirecta¹⁵. La discriminación directa incluye enfoques políticos desproporcionados para “hacer frente a la falta de vivienda” que entrañan una labor represiva para impedir la mendicidad, el merodeo, el vagabundeo, las fugas o los comportamientos de supervivencia, por ejemplo, la tipificación de delitos en razón de la condición personal¹⁶, las batidas o redadas en la calle y la violencia, el acoso y la extorsión realizados por la policía de forma selectiva. La discriminación directa puede incluir: la negativa de la policía a tomar en serio las denuncias de robo o actos de violencia presentadas por niños en situación de calle; el trato discriminatorio en los sistemas de justicia juvenil; la negativa de los trabajadores sociales, maestros o profesionales de la atención de la salud a trabajar con niños en situación de calle; y el acoso, la humillación y la intimidación por parte de compañeros y docentes en las escuelas. La discriminación indirecta incluye las políticas que dan lugar a la exclusión de los servicios básicos, como la salud y la educación, por ejemplo, al exigir el pago o la presentación de documentos de identidad. Aun cuando los niños en situación de calle no estén aislados de los servicios básicos, sí podrían estar aislados dentro de esos sistemas. Los niños pueden ser objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación, por ejemplo, sobre la base del género, la orientación sexual y la identidad o expresión de género, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la condición de indígena¹⁷, la situación de inmigración y la pertenencia a otras minoritarias, debido en particular a que entre los niños en situación de calle los grupos minoritarios están sobrerrepresentados. Los niños que son objeto de discriminación son más vulnerables a la violencia, el maltrato, la explotación, las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y su salud y su desarrollo corren un mayor peligro¹⁸. Se recuerda a los Estados que garantizar el derecho a la no discriminación no es solo una obligación pasiva de prohibir todas las formas de discriminación, sino que también exige medidas proactivas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades para todos los niños a fin de que disfruten de los derechos que les reconoce la Convención. Ello requiere la adopción de medidas positivas encaminadas a corregir una situación de desigualdad sustantiva¹⁹. Los cambios jurídicos y de políticas producen efectos en la discriminación sistémica, por lo que esta puede tratar de solucionarse introduciendo tales cambios. Los niños en situación de calle han destacado como motivo concreto de inquietud la discriminación y las actitudes negativas de las que son objeto por parte de la población, y han pedido que se adopten medidas de concienciación y educación para combatirlas.

Eliminación de la discriminación

27. La discriminación debería eliminarse tanto de manera formal, velando por que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen a nadie por encontrarse en situación de calle, como de manera sustantiva, prestando suficiente atención a los niños en situación de calle como un grupo que ha sido objeto de prejuicios persistentes y que requiere medidas de acción afirmativa²⁰. Las medidas especiales de carácter temporal que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de los niños en situación de calle no deberían considerarse discriminación. Los Estados deberían cerciorarse de que: los niños

¹⁴ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, párr. 12.

¹⁵ *Ibid.*, párr. 10.

¹⁶ Véanse las observaciones generales núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, párr. 12; y núm. 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, párrs. 8 y 9.

¹⁷ Véase la observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención.

¹⁸ Véanse las observaciones generales núm. 4, párr. 6; y núm. 3, párr. 7.

¹⁹ Véase la observación general núm. 14, párr. 41.

²⁰ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 20, párr. 8.

en situación de calle sean iguales ante la ley; se prohíba toda discriminación por estar en situación de calle; se haga frente a la incitación a la discriminación y el acoso²¹; los niños en situación de calle y sus familias no se vean privados de sus bienes de manera arbitraria; y los toques de queda sean legítimos, proporcionados y no discriminatorios. Los Estados también deberían sensibilizar a los profesionales, al sector privado y al público en general sobre las experiencias y los derechos de los niños en situación de calle, con el fin de transformar las actitudes de manera positiva. Asimismo, deberían apoyar los programas creativos, artísticos, culturales y/o deportivos encabezados por niños en situación de calle o que cuenten con su participación y que ayuden a combatir los errores de concepto y a romper las barreras con los profesionales, las comunidades —incluidos otros niños— y la sociedad en general mediante un diálogo y una interacción visibles. Entre tales actividades podrían figurar el circo, el teatro, la música, el arte y los acontecimientos deportivos en las calles. Los Estados deberían colaborar con los medios de comunicación impresos y de radiotelevisión y con los medios sociales para difundir y amplificar mensajes y noticias que sensibilicen al público y luchen contra la estigmatización, desde un enfoque basado en los derechos del niño. El miedo de la población a los actos delictivos cometidos por niños en situación de calle a menudo está alimentado por los medios de comunicación y no guarda proporción con la realidad. Se debería alentar a dichos medios a que utilicen pruebas y datos fieles a la realidad y a que acaten las normas de protección de la infancia para salvaguardar la dignidad, la seguridad física y la integridad psicológica de los niños.

Artículo 3, párrafo 1, sobre el interés superior del niño

28. Las obligaciones dimanantes de este derecho son fundamentales, como parte de un enfoque basado en los derechos del niño, a fin de garantizar la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas de los niños en situación de calle y promover su dignidad humana. Se ha determinado que esos niños son especialmente vulnerables. Como ya ha afirmado el Comité, el interés superior de un niño en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única²². En este contexto, la “vulnerabilidad” debería examinarse conjuntamente con la resiliencia y la autosuficiencia de cada uno de los niños en situación de calle.

Artículo 6 sobre el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo

Derecho a la vida

29. Los niños en situación de calle corren riesgo de sufrir, entre otras cosas: ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado; el asesinato a manos de adultos o de otros niños, incluido el asesinato vinculado a la justicia ejercida por patrullas ciudadanas, la animosidad de delincuentes y bandas delictivas, o la captación por estas, y situaciones en las que el Estado no previene esos delitos; la exposición a condiciones que pueden hacer peligrar la vida, relacionadas con formas peligrosas de trabajo infantil, accidentes de tráfico²³, abuso de drogas, explotación sexual comercial y prácticas sexuales de riesgo; y la muerte debido a la falta de acceso a una nutrición, atención de la salud y vivienda adecuadas. El derecho a la vida no debería interpretarse en un sentido restrictivo²⁴. Se refiere al derecho de las personas a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar la muerte prematura o no natural, y a disfrutar de una vida con dignidad. En 1999, en el caso de la tortura y asesinato a manos de la policía de tres niños y dos jóvenes en situación de calle en 1990, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que la privación arbitraria de la vida no se limita al acto ilegal de homicidio, sino que

²¹ *Ibid.*, párr. 7.

²² Véase la observación general núm. 14, párrs. 75 y 76.

²³ Véase la observación general núm. 4, párr. 21.

²⁴ En los trabajos preparatorios de la Convención se señala que se entendía que los derechos a la vida, a la supervivencia y al desarrollo en virtud del artículo 6 eran complementarios pero no se excluían entre sí y que el artículo plantea obligaciones positivas (E/CN.4/1988/28).

se extiende a la privación del derecho a vivir con dignidad. Esta concepción del derecho a la vida se extiende no solo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales. La necesidad de proteger a las personas más vulnerables —como es el caso de los niños en situación de calle— requiere sin duda alguna una interpretación del derecho a la vida que abarque las mínimas condiciones de vida digna²⁵.

30. El Comité ya ha destacado que crecer en condiciones de pobreza absoluta amenaza la supervivencia del niño y su salud y socava su calidad de vida básica²⁶.

Derecho a la supervivencia y al desarrollo

31. El Comité espera que los Estados interpreten el término “desarrollo” como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Los niños en situación de calle disponen de una gama limitada de actividades y comportamientos entre los que escoger para su supervivencia y desarrollo en los espacios públicos. Las obligaciones de los Estados en virtud del artículo 6 exigen que se preste suma atención a los comportamientos y los estilos de vida de los niños, aun cuando no se adecuen a lo que determinadas comunidades o sociedades consideren aceptable en virtud de las normas culturales imperantes para un determinado grupo de edad. Los programas únicamente podrán ser eficaces si tienen en cuenta la realidad de los niños en situación de calle²⁷. Las intervenciones deberían prestar apoyo a estos niños de forma individual a fin de lograr su desarrollo óptimo²⁸, elevando al máximo su contribución positiva a la sociedad.

Garantizar una vida con dignidad

32. Los Estados tienen la obligación de respetar la dignidad de los niños en situación de calle y su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, absteniéndose de cometer actos de violencia estatal y despenalizando las conductas de supervivencia y los delitos en razón de la condición personal; proteger a los niños en situación de calle frente a los daños causados por terceros; y hacer efectivo su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo mediante el diseño y la aplicación de estrategias holísticas a largo plazo, apoyadas en un enfoque basado en los derechos del niño, para que esos niños alcancen su pleno potencial. Los Estados deberían ayudar a los adultos que sean dignos de confianza y presten apoyo —como los familiares, los trabajadores sociales del Estado o de la sociedad civil, los psicólogos, los trabajadores que realizan su labor en la calle o los mentores— para que ayuden a los niños en situación de calle. También deberían tomar disposiciones prácticas y procedimentales en materia funeraria para garantizar la dignidad y el respeto de los niños que mueren en las calles.

Artículo 12 sobre el derecho a ser escuchado²⁹

33. Los niños en situación de calle se enfrentan a obstáculos especiales para ser oídos y el Comité alienta a los Estados a que adopten medidas proactivas para superar dichos obstáculos. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales deberían proporcionar —y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que proporcionen— a los niños en situación de calle un entorno propicio y favorable para: ser escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos; llevar a cabo sus propias iniciativas; y participar plenamente, a nivel comunitario y nacional, en la conceptualización, diseño, aplicación, coordinación, supervisión, examen y comunicación de políticas y programas, entre otras formas a través de los medios de comunicación. Las intervenciones resultan más beneficiosas para los niños en situación de calle cuando estos participan activamente en la evaluación de las necesidades, en la identificación de soluciones, en la formulación de estrategias y en su aplicación que cuando son meros objetos de las decisiones adoptadas.

²⁵ Opinión conjunta, *Villagrán Morales y otros vs. Guatemala*, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 19 de noviembre de 1999. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf.

²⁶ Véase la observación general núm. 7, párr. 26.

²⁷ Véase la observación general núm. 3, párr. 11.

²⁸ Véase la observación general núm. 5, párr. 12.

²⁹ Observación general núm. 12 (2009), sobre el derecho del niño a ser escuchado.

Los Estados también deberían escuchar a los adultos pertinentes, como los familiares y los miembros de la comunidad, profesionales y defensores, al elaborar estrategias de prevención y respuesta. Las intervenciones deberían apoyar a los niños en situación de calle para que ejerzan sus derechos y desarrollen sus aptitudes, resiliencia, responsabilidad y ciudadanía, en función de la evolución de sus capacidades. Los Estados deberían apoyar y estimular a los niños en situación de calle para que formen sus propias organizaciones e iniciativas dirigidas por ellos mismos, que crearán un espacio para la participación y representación auténticas³⁰. Cuando corresponda, y cuando tengan la protección adecuada, los niños en situación de calle pueden generar una mayor sensibilización dando a conocer sus experiencias, a fin de reducir la estigmatización y la discriminación y ayudar a evitar que otros niños terminen en situación de calle.

Artículo 4 sobre las medidas apropiadas

34. En virtud del artículo 4, los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. Esto se aplica a todos los niños sin discriminación alguna, prestando especial atención a los grupos más desfavorecidos, lo que incluye claramente a los niños en situación de calle³¹. Corresponde a cada Estado parte una obligación mínima de asegurar, al menos, el cumplimiento de un nivel mínimo de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales³². Los Estados deberían velar por que ello se aplique a los niños en situación de calle. La falta de recursos no es un argumento válido en sí mismo para que los Estados no cumplan esta obligación básica. Como ya ha señalado el Comité, las obligaciones fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los derechos de los niños no se verán comprometidas por ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos de crisis económica³³. Los Estados deberían velar por que los niños en situación de calle no se vean afectados por medidas regresivas en tiempos de crisis económica.

Artículo 5 sobre la dirección y orientación en consonancia con la evolución de sus facultades

35. A fin de intensificar la prevención, los Estados deberían fomentar la capacidad de los padres, la familia extensa, los tutores y los miembros de la comunidad para proporcionar dirección y orientación adecuadas a los niños, ayudándolos a tener en cuenta las opiniones de estos, de acuerdo con su edad y madurez; proporcionar un entorno seguro y propicio en el que el niño pueda desarrollarse; y reconocer al niño como un titular activo de derechos que es cada vez más capaz de ejercerlos a medida que se desarrolla, si recibe la orientación y dirección adecuadas. El Comité ya se ha ocupado del principio de la evolución de las facultades del niño: a medida que el niño sepa, haya experimentado y comprenda más cosas, los padres o tutores tienen que ir transformando la dirección y orientación en recordatorios y consejos y, más adelante, en un diálogo en pie de igualdad³⁴. Los niños en situación de calle requieren una dirección y orientación ejercidas con especial sensibilidad, que respeten sus experiencias vitales. La mayoría de los niños en situación de calle mantienen el contacto con sus familias y cada vez hay más datos sobre formas eficaces de estrechar esos lazos familiares. Si los niños en situación de calle tienen escasas o nulas conexiones positivas con sus padres, su familia extensa o sus tutores legales, el papel de los miembros de la comunidad, según se indica en el artículo 5, cobra mayor importancia y se entiende que ello incluye el apoyo de adultos de confianza vinculados a las organizaciones de la sociedad civil.

³⁰ Véase *ibid.*, párr. 128.

³¹ Véase la observación general núm. 5, párr. 8.

³² Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 3 (1990), sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, párr. 10.

³³ Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, párr. 31.

³⁴ Véanse la observación general núm. 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado, párr. 84, y la observación general núm. 14, párr. 44.

B. Derechos y libertades civiles

Artículo 15 sobre la libertad de asociación y de reunión pacífica

Presentación general

36. La realidad que viven los niños en situación de calle no se ajusta a las definiciones o a la conceptualización tradicionales de la infancia. Con respecto a otros niños, estos tienen una relación especial con los espacios públicos. Por tanto, las restricciones de los Estados al ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 15 en relación con los espacios públicos pueden tener consecuencias desproporcionadas en los niños en situación de calle. Los Estados deberían velar por que no se discrimine en el acceso a los espacios políticos y públicos de asociación y de reunión pacífica.

Espacio civil y político

37. La asociación y la reunión pacífica son elementos esenciales para que los niños en situación de calle puedan hacer valer sus derechos, por ejemplo a través de sindicatos de niños trabajadores y de asociaciones dirigidas por niños. Sin embargo, en sus observaciones finales, el Comité ha expresado reiteradamente su preocupación con respecto a la falta de espacios políticos en los que se dé la palabra a los niños. Estos espacios son especialmente restringidos en el caso de los niños en situación de calle, que a menudo carecen de vínculos con un adulto de confianza que pueda registrar legalmente una organización en su nombre. Los niños en situación de calle pueden carecer de apoyo para realizar trámites y acceder a información que les permita desarrollar iniciativas de asociación y de reunión pacífica. Puede ocurrir que se remunere a los niños en situación de calle para aumentar el número de participantes en manifestaciones o reuniones. Estos niños pueden ser vulnerables a la explotación y desconocer las consecuencias de su participación en esos acontecimientos, lo que plantea cuestiones complejas con respecto a la necesidad de equilibrar los derechos de protección y de participación. Ahora bien, como expresó el Comité en sus observaciones finales, esto no debería servir de excusa para restringir su derecho de asociación y de reunión pacífica. En virtud del artículo 15, los Estados deben empoderar a los niños en situación de calle para que estos puedan ejercer sus derechos de participación y luchar contra la captación y la manipulación por parte de los adultos.

Espacios públicos

38. Además de la libertad de asociación y de reunión pacífica en el contexto de los derechos civiles y políticos, el Comité destaca la importancia de respetar la decisión de los niños en situación de calle de formar asociación en los espacios públicos, sin que ello constituya una amenaza para el orden público, con el fin de satisfacer sus derechos a la supervivencia y al desarrollo (art. 6), al descanso, el esparcimiento y las actividades recreativas (art. 31)³⁵, así como a crear redes y organizar su vida social como una característica fundamental de la vida en general. Para los niños en situación de calle, agruparse de esta manera forma parte de la vida y no siempre se puede desglosar en actividades diferenciadas como la comida, el sueño o las actividades recreativas. En el caso de los niños que no viven en la calle, esta coexistencia cooperativa con los demás tiene lugar principalmente en entornos como la familia o la escuela. Sin embargo, para los niños en situación de calle, esta transcurre en los espacios públicos. Esos niños necesitan un espacio seguro en el que puedan ejercer su derecho de asociación, entendido aquí en combinación con otros derechos protegidos por la Convención como “pasar tiempo con otras personas en lugares públicos”. En relación con el artículo 31, el Comité ha estudiado la disminución de la tolerancia hacia los niños en los espacios públicos³⁶. En la presente observación general, el Comité amplía su preocupación por la disminución de la tolerancia al uso de los espacios públicos por los niños para fines distintos de los previstos en el artículo 31.

³⁵ Véase la observación general núm. 17 (2013) sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, párr. 21.

³⁶ *Ibid.*, párr. 37.

Restricciones al ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 15

39. De conformidad con el artículo 15, párrafo 2, las medidas policiales o de otra índole relacionadas con el orden público solo son admisibles si se ajustan a la ley, suponen una apreciación individual y no colectiva, respetan el principio de proporcionalidad y representan la opción menos intrusiva. Esas medidas no deberían aplicarse con carácter grupal o colectivo³⁷. Esto significa que el acoso, la violencia, las redadas y las batidas contra los niños en situación de calle, entre otras circunstancias en el contexto de grandes acontecimientos políticos, públicos o deportivos, u otras intervenciones que restrinjan o menoscaben su derecho de asociación y de reunión pacífica, contravienen el artículo 15, párrafo 2. No reconocer los sindicatos de niños trabajadores y las organizaciones dirigidas por niños en situación de calle legalmente constituidos, y/o exigir a las organizaciones licencias a las que los niños en situación de calle no tienen un acceso razonable, constituye una discriminación contra ellos y no se ajusta al artículo 15, párrafo 2.

Medidas de ejecución

40. Los Estados no deberían acosar a los niños en situación de calle ni retirarlos de manera arbitraria de los espacios públicos donde se asocian y reúnen pacíficamente. Debería sancionarse a quienes violen ese derecho. Es necesario impartir formación especializada para desarrollar la capacidad de la policía y las fuerzas de seguridad de hacer frente a los problemas de orden público de una manera que respete los derechos de los niños en situación de calle³⁸. Deberían revisarse las ordenanzas de las administraciones locales para garantizar el cumplimiento del artículo 15, párrafo 2. Los Estados deberían apoyar la aplicación de medidas positivas, tales como el empoderamiento de los niños en situación de calle mediante la enseñanza de los derechos del niño y la preparación para la vida; la preparación de las partes interesadas para aceptar las opiniones de dichos niños en la toma de decisiones, expresadas a través del ejercicio del derecho de asociación y de reunión; y la promoción de la participación de esos niños en las actividades recreativas, el esparcimiento, los deportes y las actividades artísticas y culturales, junto con otros niños de la comunidad. La legislación no debería exigir el registro oficial de las asociaciones o reuniones pacíficas de niños en situación de calle para ser acreedoras a la protección prevista en el artículo 15.

Artículo 7 sobre la inscripción de los nacimientos y artículo 8 sobre la identidad

41. La falta de un documento de identidad tiene efectos negativos en la protección de los derechos de los niños en situación de calle respecto de la educación, la salud y otros servicios sociales, la justicia, la herencia y la reunificación familiar. Como mínimo, los Estados deberían velar por que todos los niños, sea cual sea su edad, tengan acceso al registro de su nacimiento de manera gratuita, sencilla y rápida. Se debería apoyar proactivamente a los niños en situación de calle para que obtengan documentos de identidad legales. Como solución temporal, los Estados y los gobiernos locales deben concebir soluciones innovadoras y flexibles, como tarjetas de identidad oficiosas, vinculadas a miembros y direcciones de las organizaciones de la sociedad civil, de modo que los niños tengan mientras tanto acceso a los servicios básicos y a la protección del sistema de justicia. Deberían adoptarse soluciones innovadoras para superar las dificultades a las que se enfrentan los niños en situación de calle, que a menudo son sumamente móviles y carecen de medios para conservar un documento de identidad en un lugar seguro, sin perderlo, sin que se deteriore o sin que sea robado.

³⁷ Véase la observación general núm. 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, párr. 18. Elaborada originalmente en relación con los niños no acompañados y separados que han cruzado una frontera internacional, en la presente observación general el Comité extiende esta interpretación a todos los niños en situación de calle.

³⁸ Véase la observación general núm. 13, párr. 44.

Artículo 13 sobre la libertad de expresión y artículo 17 sobre el acceso a la información

42. El derecho de los niños en situación de calle a buscar, obtener y difundir información acerca de sus derechos es fundamental para que esos derechos se entiendan y se hagan efectivos en la práctica. Una enseñanza de los derechos del niño que sea accesible y adaptada al contexto ayudará a superar los obstáculos a la participación, de manera que los niños en situación de calle puedan hacer valer sus opiniones. Dichos niños deben disponer de canales accesibles y adecuados para obtener información exacta, de calidad y especialmente ideada para ellos sobre: a) el papel y la responsabilidad del Estado, y los mecanismos de denuncia para obtener reparación en relación con violaciones de los derechos humanos; b) la protección contra la violencia; c) la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual; d) estilos de vida saludables, incluidas la dieta y la actividad física; e) comportamientos sociales y sexuales sanos y respetuosos; f) la prevención de accidentes; y g) los efectos negativos del uso indebido del alcohol, el tabaco, las drogas y otras sustancias nocivas.

Artículo 16 sobre la vida privada, la honra y la reputación

43. Para los niños en situación de calle, el disfrute de la vida privada puede verse limitado habida cuenta de que llevan a cabo sus actividades en espacios públicos. La discriminación debida a la vinculación con la calle de los propios niños, sus padres o familiares los hace particularmente vulnerables a las violaciones del artículo 16. El Comité reconoce que el desalojo forzoso vulnera el artículo 16 de la Convención, y el Comité de Derechos Humanos ha reconocido en el pasado que se trata de una violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³⁹. Las recomendaciones contenidas en el párrafo 27 sobre la lucha contra la estigmatización, y en el párrafo 60 sobre la no discriminación y el trato respetuoso por parte de la policía, proporcionan orientaciones en relación con la honra y la reputación.

C. Entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado

Artículo 20 sobre el derecho a la protección y asistencia especiales a los niños privados de un entorno familiar

Tipos de cuidado

44. En el caso de los niños en situación de calle sin cuidadores principales o circunstanciales, el cuidador *de facto* es el Estado y está obligado, en virtud del artículo 20, a garantizar otros tipos de cuidado a los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar⁴⁰. Los tipos de cuidado pueden consistir en lo siguiente: apoyo moral y práctico a los niños en situación de calle a través de un trabajador de la calle adulto de confianza o del apoyo entre pares, sin exigir a los niños que renuncien a sus conexiones con la calle y/o se muden a una vivienda alternativa y sin coaccionarlos a ello; centros sociales y comunitarios y centros de acogida; albergues nocturnos; centros de día; asistencia residencial temporal en hogares funcionales; acogimiento familiar; reunificación familiar; y vida independiente u otras opciones de cuidado a largo plazo, incluida, aunque no exclusivamente, la adopción. La privación de libertad, por ejemplo, en celdas de detención o centros de régimen cerrado, nunca es una forma de protección.

Aplicación de un enfoque basado en los derechos del niño

45. Las intervenciones que no respetan a los niños como agentes activos en el proceso de transición de la calle hacia modalidades alternativas de cuidado no funcionan: en esos casos, los niños suelen terminar por regresar a las calles cuando huyen o cuando el acogimiento familiar fracasa. Esto suele suceder cuando los niños en situación de calle son

³⁹ Véase CCPR/CO/83/KEN, párr. 22, y CCPR/C/BGR/CO/3, párr. 24.

⁴⁰ Véase la observación general núm. 13, párrs. 33 y 35.

enviados a zonas desconocidas a vivir con familiares a quienes apenas conocen. La aplicación de un enfoque basado en los derechos del niño a la elaboración y oferta de opciones alternativas permite que los Estados se aseguren de que los niños no se vean obligados a depender de sus conexiones con la calle para su supervivencia y/o desarrollo ni a aceptar un acogimiento familiar en contra de su voluntad. Los Estados deberían asegurarse, mediante leyes, normas y directrices de política, de que se recaben y se tengan en cuenta las opiniones del niño en las decisiones relativas al acogimiento familiar, la elaboración y la revisión de planes de guarda y las visitas a la familia⁴¹. Los Estados deberían respetar los parámetros internacionales establecidos según los cuales la atención en instituciones solo debe ser un último recurso⁴², así como velar por que los niños no estén en acogimiento alternativo de manera innecesaria y por que, cuando en efecto sea necesario, el acogimiento alternativo se haga en condiciones adecuadas que se ajusten a los derechos y el interés superior del niño⁴³. Los Estados deberían velar por que los albergues y otros centros gestionados por el Estado y la sociedad civil sean seguros y de buena calidad. Cuando se considere que el acogimiento familiar obedece al interés superior del niño, en consulta con los niños en situación de calle interesados, es necesario preparar cuidadosamente a ambas partes y efectuar un seguimiento. A menudo hace falta una etapa de transición entre la calle y el acogimiento a largo plazo, y la duración de ese período se determinará caso por caso, en consulta con el niño. La utilización de calabozos de la policía o similares para acoger a los niños debido a la falta de modalidades alternativas de cuidado es inaceptable.

Artículo 9 sobre la separación del niño con respecto a los padres

46. Muchos niños en situación de calle viven con sus familias, ya sea en la calle o fuera de ella, y/o mantienen vínculos con su familia, y deberían recibir apoyo para mantener esos vínculos. Los Estados no deberían separar a los niños de sus familias solamente porque estas trabajen o vivan en la calle. Del mismo modo, los Estados no deberían separar a los bebés o a los niños nacidos de los propios niños en situación de calle. La pobreza económica y material, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no deberían constituir nunca la única justificación para separar a un niño del cuidado de sus padres, sino que deberían considerarse como un indicio de la necesidad de proporcionar a la familia el apoyo apropiado⁴⁴. Para evitar la separación a largo plazo, los Estados pueden promover modalidades de cuidado temporales que respeten los derechos para aquellos niños cuyos padres, por ejemplo, emigran en determinados períodos del año para desempeñar un empleo estacional.

Artículo 3, párrafo 3, sobre las normas para las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, y artículo 25 sobre el examen periódico del acogimiento

47. Es importante establecer, mantener y supervisar la calidad de los servicios estatales y no estatales para evitar que los niños terminen en situación de calle como consecuencia de que no se hayan hecho efectivos sus derechos de cuidado y protección, así como en beneficio de los niños que ya se encuentran en tal situación. Los Estados deberían proporcionar servicios de calidad que respeten los derechos y prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para que también lo hagan. Las instituciones, servicios y establecimientos no estatales para los niños en situación de calle deberían contar con el apoyo, los recursos y la acreditación del Estado, que se encargará también de su reglamentación y supervisión. El personal que preste esos servicios debería estar capacitado para ello, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18.

⁴¹ Véanse las observaciones generales núm. 12, párr. 54; núm. 6, párr. 40; y núm. 7, párr. 36, b).

⁴² Véase la observación general núm. 3, párr. 35.

⁴³ Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo.

⁴⁴ Véase la observación general núm. 14, párr. 62.

Artículo 18 sobre la responsabilidad de los padres

48. El apoyo a los padres y tutores es esencial para evitar que los niños terminen en situación de calle y para reforzar los programas de reunificación familiar destinados a los niños que ya se encuentran tal situación. Los Estados tienen la obligación de prestar a los padres y a los tutores legales la asistencia apropiada para el cumplimiento de sus responsabilidades en lo que respecta a la crianza del niño y deben velar por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Asimismo, deberían adoptar medidas para eliminar las fuerzas estructurales que ejercen presión sobre las familias en situación precaria. En ese sentido, cabe abordar una serie de cuestiones fundamentales: la mejora del desarrollo de la comunidad basado en los derechos en barrios empobrecidos; el establecimiento de redes globales de seguridad social y económica; la oferta de centros de día y otros servicios especializados seguros y asequibles; y la mejora del acceso a una vivienda adecuada y a oportunidades de generación de ingresos para las familias. Además de los enfoques estructurales y de política, las familias vulnerables necesitan soluciones personalizadas propuestas por profesionales capacitados. Los Estados deberían invertir en programas de apoyo a la familia que se guíen por un enfoque basado en los derechos del niño y sean capaces de detener la transmisión intergeneracional de aquellos factores que aumentan la probabilidad de que los niños acaben en situación de calle, y deberían ampliar dichos programas. También deberían tomar medidas para impartir una enseñanza universal sobre los derechos del niño y la crianza positiva de los niños a todos los padres y cuidadores, dando prioridad —sin crear estigmas— a las familias con niños en peligro de acabar en situación de calle. Esta enseñanza debería abarcar los derechos del niño, incluida la forma de escuchar a los niños e incluir sus opiniones en la toma de decisiones; la crianza positiva, incluidos conocimientos de disciplina positiva, la resolución no violenta de conflictos y la crianza con apego; y el desarrollo del niño en la primera infancia. Véanse también los párrafos 35 y 49.

D. Nivel de vida adecuado

Artículo 27 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado

Apoyo a los padres, los cuidadores y los niños

49. De conformidad con el artículo 27, párrafo 3, los Estados deberían velar por que todos los niños tengan un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y moral, con el fin de evitar que acaben en situación de calle y hacer valer los derechos de los niños que ya se encuentran en tal situación. Los Estados adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Esos requisitos no dejan margen a la discreción de los Estados. La aplicación de lo anterior, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a los medios de los Estados partes, debería interpretarse conjuntamente con el artículo 4, es decir, hasta el máximo de los recursos de que dispongan los Estados partes y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de los Estados relativas al cumplimiento de la obligación mínima fundamental de satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales. En cuanto a la asistencia material, los niños en situación de calle dan prioridad a la necesidad de contar con un lugar seguro para vivir, disponer de alimentos y tener acceso gratuito a la educación y la atención médica, mediante el apoyo del Estado a los padres y cuidadores, en particular en relación con la vivienda adecuada y subvencionada y la generación de ingresos. La interpretación del artículo 27, párrafo 3, no se limita a las medidas para ayudar a los padres y a otras personas responsables del niño. La obligación de ofrecer asistencia material y programas de apoyo en caso de necesidad también debería interpretarse en el sentido de la asistencia directa a los niños. Esto es especialmente importante para los niños en situación de calle que carecen de conexiones familiares o se encuentran en situación de maltrato familiar. La asistencia material directa, en forma de servicios, puede llegar a los niños de mano del Estado o a través del apoyo prestado por este a las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de

las familias monoparentales y reconstituidas, las medidas estatales para asegurar el sustento del niño son especialmente importantes (véase el artículo 27, párrafo 4).

Vivienda adecuada

50. El derecho a la vivienda es un componente importante del artículo 27, especialmente en lo que respecta a los niños en situación de calle. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le ha dado una interpretación amplia, definiéndolo como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte⁴⁵, y aclarando que en el concepto de “adecuación” en relación con la vivienda cabe tener en cuenta la seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; los gastos soportables; la habitabilidad; la asequibilidad; el lugar; y la adecuación cultural⁴⁶. Los niños se cuentan entre quienes sufren de manera desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos⁴⁷, los cuales mediante, entre otras cosas, el derribo de viviendas informales o ilegales, pueden hacer la vida más precaria para los niños, obligándoles a dormir en la calle y exponiéndolos aún más a la violación de sus derechos. Un tema predominante de las consultas con los niños en situación de calle es la insuficiencia y la inadecuación de algunos “albergues” de gestión estatal y sus altos niveles de violencia e inseguridad; tanto es así que los niños prefieren permanecer en la calle.

Medidas de ejecución

51. Los Estados deberían adoptar medidas para hacer frente a las causas estructurales de la pobreza y las desigualdades de ingresos con el fin de reducir la presión sobre las familias en situación de precariedad y fortalecerlas, como medio de ofrecer una mejor protección a los niños y reducir la probabilidad de que estos acaben en situación de calle. Esas medidas incluyen: la introducción de políticas fiscales y de gasto que reduzcan las desigualdades económicas; la ampliación del empleo con un salario justo y de otras oportunidades de generación de ingresos; la introducción de políticas en favor de los pobres para el desarrollo rural y urbano; la eliminación de la corrupción; la introducción de políticas y presupuestos centrados en los niños; el refuerzo de los programas de alivio de la pobreza centrados en el niño en zonas donde se registren altos niveles de migración; y la oferta de una seguridad social y una protección social adecuadas. Ejemplos concretos de ello son los programas de prestaciones por hijos a cargo utilizados en países de Europa y América del Norte, y los programas de transferencia de efectivo aplicados en países de América Latina y frecuentes en países de Asia y África. Los Estados deberían procurar que esos programas lleguen a las familias más marginadas que no disponen de cuentas bancarias. Se debería prestar apoyo material a los padres y cuidadores y también directamente a los niños en situación de calle, y esos mecanismos y servicios deberían concebirse y aplicarse con arreglo a un enfoque basado en los derechos del niño. Con respecto a la vivienda, la seguridad de la tenencia es fundamental para evitar que los niños acaben en situación de calle. Ello implica el acceso a una vivienda adecuada y segura, con abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento e higiene. Los niños, incluidos los que se alojan en viviendas informales o ilegales, no deberían ser objeto de desalojos forzosos sin que se les proporcione una vivienda alternativa adecuada: los Estados deben adoptar disposiciones apropiadas para los niños afectados. La realización de evaluaciones del impacto en los derechos humanos y en los derechos del niño debería ser un requisito previo para la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura, a fin de reducir al mínimo los efectos negativos de los desplazamientos.

⁴⁵ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada, párr. 7.

⁴⁶ *Ibid.*, párr. 8.

⁴⁷ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos, párr. 10.

E. Discapacidad y salud

Artículo 23 sobre los niños con discapacidad

52. Los niños con discapacidad terminan en las calles por diversas razones, como pueden ser las circunstancias económicas y sociales, y a veces son explotados con fines de mendicidad. Los Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y tipificar como delito esta forma de explotación y llevar a los responsables ante la justicia⁴⁸. Los niños en situación de calle pueden correr el riesgo de desarrollar una discapacidad debido a los efectos negativos de ciertos aspectos de la vida en la calle, como la violencia, la explotación y el abuso de sustancias. Las discapacidades intelectuales y psicosociales pueden hacer que los niños en situación de calle sean especialmente vulnerables a la explotación y el maltrato. Los Estados deberían adoptar medidas de protección especiales, como la identificación y eliminación de los obstáculos que impiden que los niños con discapacidad tengan acceso a servicios como la educación inclusiva.

Artículo 24 sobre la salud⁴⁹ y artículo 33 sobre el abuso de drogas y otras sustancias adictivas

53. El entorno de la calle puede aumentar la vulnerabilidad a los problemas de salud física y mental⁵⁰, entre ellos las tasas desproporcionadamente altas de abuso de sustancias, el VIH⁵¹ y otras infecciones de transmisión sexual, los embarazos, la violencia (incluida la infligida por otros niños), los pensamientos suicidas y el suicidio, la automedicación con fármacos no regulados y la exposición a enfermedades infecciosas, la contaminación y los accidentes de tráfico. El Comité hace hincapié en la necesidad de ofrecer educación sanitaria y servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, adaptados a las necesidades específicas de los niños en situación de calle. Esa educación y esos servicios deberían comprender y apoyar al niño, ser completos, accesibles, gratuitos y confidenciales, no someterlo a juicios de valor, no ser discriminatorios, respetar su autonomía para tomar decisiones y no requerir el consentimiento de los padres⁵². Los niños deberían tener acceso a los servicios de salud con independencia de su ubicación física o condición social. Los niños en situación de calle deberían tener acceso gratuito a los servicios de atención sanitaria básica a través de la cobertura universal de salud y planes de protección social. Los Estados deberían aumentar la disponibilidad de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación del abuso de sustancias adictivas, que incluyan medidas para la reducción del daño, así como de terapia para el trauma y de servicios de salud mental para los niños en situación de calle. Estos servicios deberían estar dotados de profesionales formados en los derechos del niño y en las circunstancias particulares de los niños en situación de calle. Los Estados pueden promover una enseñanza entre pares que cuente con el debido apoyo y que puede ser especialmente eficaz en la lucha contra el abuso de sustancias, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. En particular, se debe procurar proteger a los niños en situación de calle para impedir que se impliquen en el tráfico de drogas.

F. Educación, esparcimiento y actividades culturales

Artículo 28 sobre la educación

54. Es fundamental ofrecer una educación de calidad, accesible, gratuita, segura y pertinente para evitar que los niños terminen en situación de calle y para hacer efectivos los derechos de los niños que ya se encuentran en tal situación. Para muchos niños, la educación representa el último punto de conexión con el resto de la sociedad. Los Estados deberían tomar medidas adecuadas, incluida la prestación de apoyo a los padres, los

⁴⁸ Véase la observación general núm. 9, párr. 76.

⁴⁹ Observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud.

⁵⁰ Véase la observación general núm. 4, párr. 34.

⁵¹ Véase la observación general núm. 3, párr. 30.

⁵² *Ibid.*, párrs. 20 y 21; observaciones generales núm. 4, párrs. 11 y 26; y núm. 15, en particular los párrs. 8, 11 y 28.

cuidadores y las familias, para que los niños en situación de calle puedan permanecer escolarizados y su derecho a una educación de calidad esté plenamente protegido. Hace falta ofrecer una gama de opciones educativas, como la enseñanza de segunda oportunidad, clases de recuperación, escuelas itinerantes, formación profesional vinculada a estudios de mercado y con un apoyo a largo plazo para la generación de ingresos, y vías de acceso a la educación formal, mediante alianzas con la sociedad civil. Se debería formar a los docentes sobre los derechos del niño y sobre los niños en situación de calle, así como sobre metodologías de enseñanza participativas centradas en el niño.

Artículo 29 sobre los propósitos de la educación⁵³

55. Los propósitos de la educación de los niños en situación de calle deberían ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 e incluir la alfabetización, la aritmética elemental, la alfabetización digital, la preparación para la vida, la enseñanza de los derechos del niño, la tolerancia de la diversidad y la educación para la ciudadanía. Esa educación es de vital importancia para hacer efectivos los derechos del niño a la protección, el desarrollo y la participación, incluido el refuerzo de su autonomía y el empoderamiento para responder mejor a las situaciones de riesgo, con objeto de evitar que los niños terminen en situación de calle y ayudar a aquellos que ya se encuentran en esa situación. Los Estados deberían adoptar medidas para impartir una enseñanza de los derechos del niño y una preparación para la vida universales, gratuitas y de buena calidad a todos los niños, ya sea a través de los programas escolares, o de la educación no formal y de la educación de calle para llegar a los niños sin escolarizar.

Artículo 31 sobre el descanso, el juego y el esparcimiento

56. El Comité pone de relieve el derecho al descanso, el juego, el esparcimiento y la participación en actividades artísticas y culturales. Los niños en situación de calle recurren a su propia creatividad para encontrar oportunidades de juego en el entorno informal de las calles⁵⁴. Los Estados deberían garantizar que estos niños no sean excluidos de manera discriminatoria de los parques y los campos de juego, por ejemplo debido a su atuendo⁵⁵, y adoptar medidas para ayudarlos a desarrollar su creatividad y practicar deporte, incluso con instalaciones móviles de recreación y deportes.

G. Violencia contra los niños y medidas especiales de protección

Artículos 19 y 39 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia⁵⁶

57. La violencia en todas sus formas —emocional, física o sexual— es tanto una causa fundamental como una consecuencia de que los niños terminen en situación de calle. La violencia de todo tipo impregna la vida de los niños en situación de calle en gran escala y es una de las principales preocupaciones señaladas por los propios niños. Es preciso adoptar medidas inmediatas, específicas y urgentes para proteger a los niños en situación de calle. Conjuntamente con todas las recomendaciones formuladas en la observación general núm. 13, esas medidas incluyen: la prohibición de todas las formas de violencia, incluidos los castigos corporales; mecanismos para llegar a los niños vulnerables que se encuentran en proceso de desconexión de la familia y la comunidad; mecanismos para denunciar la violencia, la discriminación y otras formas de violaciones de los derechos; y mecanismos para exigir responsabilidades a los autores de actos de violencia, ya sean estatales o no estatales, a título individual o colectivo. Podría ser necesario establecer mecanismos especiales para ocuparse de las personas a quienes estos niños denuncien por considerarlas

⁵³ Observación general núm. 1 (2001), sobre los propósitos de la educación.

⁵⁴ Observación general núm. 17.

⁵⁵ *Ibid.*, párr. 49.

⁵⁶ Véanse las observaciones generales núm. 3, párrs. 19 y 36 y 37; núm. 4, párrs. 2 y 23; núm. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes; y núm. 13.

una amenaza a su bienestar, como algunos miembros de la policía y las personas implicadas en la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Artículos 34 a 36 sobre el abuso sexual, la explotación sexual, la trata y otras formas de explotación

58. Los niños en situación de calle son particularmente vulnerables a la violencia y la explotación sexuales, y en ese sentido resulta especialmente pertinente el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Se debería encargar la formulación de respuestas que tengan en cuenta las cuestiones de género a profesionales capacitados para entender las circunstancias específicas de los niños en situación de calle. Es posible que los niños se encuentren en situación de calle por haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, y/o pueden ser vulnerables a dicha trata, así como al tráfico de órganos y otras formas de explotación, una vez en la calle.

Artículo 32 sobre el trabajo infantil

59. El Comité insta a los Estados a aplicar las disposiciones del artículo 32, párrafo 2, de la Convención, así como el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) de la Organización Internacional del Trabajo, para proteger a los niños en situación de calle de la explotación económica y las peores formas de trabajo infantil. La lucha contra el trabajo infantil debería comprender medidas amplias, incluida la prestación de apoyo para facilitar la transición de los niños a la escuela y la garantía de un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias. Esas medidas deberían desarrollarse en colaboración con los niños en situación de calle y otras partes interesadas a fin de tener en cuenta el interés superior del niño y velar por que no tengan ningún efecto negativo involuntario en la supervivencia del niño o su desarrollo. La tipificación como delito de la mendicidad o del comercio sin licencia puede dar lugar a las peores formas de comportamientos de supervivencia, como la explotación sexual con fines comerciales. El establecimiento de planes de ahorro para enseñar a los niños en situación de calle a organizar su presupuesto y salvaguardar sus ingresos resulta beneficioso.

Artículos 37 y 40 sobre la justicia juvenil

60. Los niños en situación de calle tienen más probabilidades de convertirse en víctimas, ser tratados como delincuentes y acabar ante la justicia juvenil o para adultos, y menos posibilidades de beneficiarse de medidas extrajudiciales, medidas alternativas a la detención o medidas de justicia restaurativa, ya que no pueden costear una fianza y quizá no tengan cerca a un adulto que responda por ellos. Las conductas indebidas de la policía, que pueden consistir en acoso (incluido el robo de dinero y pertenencias del niño, redadas o traslados arbitrarios, a menudo por orden de sus superiores y/o de cargos políticos), corrupción, extorsión (para obtener dinero o sexo) y violencia física, psicológica o sexual, constituyen vulneraciones frecuentes de los derechos que los Estados deberían tipificar como delito con carácter urgente. El Comité está preocupado por la aplicación de políticas de “tolerancia cero” que tratan como delincuentes a los niños en situación de calle y dan lugar a su internamiento forzado. Los Estados deberían apoyar a la policía de proximidad, con especial hincapié en la protección más que en el castigo de los niños en situación de calle, y dotarse de un servicio de policía multicultural. Asimismo, deberían garantizar todos los derechos a la totalidad de los niños, incluidos los niños en situación de calle, en el contexto de un sistema de justicia juvenil restaurativa y no punitiva⁵⁷.

Artículo 38 sobre los conflictos armados

61. El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados es pertinente en la medida en que los niños en situación de calle son vulnerables al reclutamiento en las fuerzas armadas o por grupos armados. Los conflictos pueden dar lugar a que los niños terminen en situación de calle debido al desbaratamiento

⁵⁷ Véanse las observaciones generales núm. 6, párr. 61; y núm. 10, párrs. 6, 8 y 9 y 16.

de sus redes sociales, la separación de su familia, el desplazamiento de su comunidad o el rechazo de esta a los niños combatientes desmovilizados. En relación con la prevención, es preciso que la enseñanza de los derechos del niño, incluida la educación para la paz, y las iniciativas contra el reclutamiento lleguen a los niños en situación de calle. Las intervenciones para reducir al mínimo los efectos de los conflictos armados deben mitigar de manera proactiva la separación de los niños respecto de sus familias, y se debería dar prioridad a los programas de localización de familias. Los programas de desarme, desmovilización y reintegración de los niños deberían tener en cuenta que las dinámicas de vinculación con la calle son tanto una causa como una consecuencia de la participación de niños en los conflictos armados.

VI. Difusión y cooperación

Difusión

62. El Comité recomienda que los Estados partes difundan ampliamente la presente observación general entre las estructuras gubernamentales, jurídicas y administrativas, los niños en situación de calle, los padres y cuidadores, las asociaciones profesionales, las comunidades, el sector privado y la sociedad civil. Para ello, procede emplear todos los canales de difusión, incluidos los medios impresos, Internet y los propios medios de comunicación de los niños, como la transmisión oral de relatos y la enseñanza entre pares. Se necesitará traducirla a los idiomas pertinentes, también la lengua de señas, el Braille y formatos fáciles de leer para los niños con discapacidad o bajos niveles de alfabetización. Asimismo, habrá que ofrecer versiones culturalmente apropiadas y adaptadas a los niños, que contengan ilustraciones en lugar de solo texto, organizar talleres y seminarios, y prestar asistencia adaptada a la edad y la discapacidad para estudiar sus consecuencias y el modo en que puede aplicarse con más eficacia, e incorporarla a la formación de todos los profesionales que trabajen para y con niños en situación de calle. También se alienta a los Estados a incluir información sobre los niños en situación de calle en los informes que presenten al Comité.

Cooperación internacional

63. El Comité exhorta a los Estados a que intensifiquen su compromiso, cooperación y asistencia mutua a nivel internacional para impedir que los niños terminen en situación de calle y proteger a los niños que ya se encuentran en esa situación mediante, entre otras cosas, la identificación y el intercambio de prácticas basadas en los derechos que hayan demostrado ser eficaces, los trabajos de investigación, las políticas, la vigilancia y el fomento de la capacidad. La cooperación implica la participación de los Estados, los órganos y organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones dirigidas por niños y la comunidad académica), los niños, el sector privado y las asociaciones profesionales. El Comité alienta a todos estos actores a que promuevan los diálogos permanentes y de alto nivel en materia de políticas y la investigación en relación con las intervenciones de base empírica y de calidad para la prevención y la respuesta, lo que incluye diálogos en los planos internacional, nacional, regional y local. En el marco de esa cooperación podría ser necesario abordar la protección de los niños que cruzan las fronteras en calidad de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo o como víctimas y supervivientes de la trata transfronteriza.